



Asamblea General

Distr.  
GENERAL

A/47/574  
6 de noviembre de 1992  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo séptimo período de sesiones  
Tema 33 del programa

POLITICA DE APARTHEID DEL GOBIERNO DE SUDAFRICA

Tercer informe sobre los progresos logrados en la aplicación  
de la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias  
destructivas para el Africa meridional

Informe del Secretario General

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION .....	1 - 4	2
II. OBSERVACIONES DEL SECRETARIO GENERAL .....	5 - 11	3

Anexos

I. Análisis de la información presentada al Secretario General respecto de la aplicación de la Declaración sobre el <u>apartheid</u> y sus consecuencias destructivas para el Africa Meridional .....	5
II. Declaración de Intención aprobada el 20 de diciembre de 1991 por los participantes en la primera reunión de la Convención para una Sudáfrica democrática .....	20
III. Declaración Conjunta y Acta de Entendimiento, dadas por el Presidente Frederik W. de Klerk y el Presidente del ANC, Sr. Nelson Mandela el 26 de septiembre de 1992 .....	22

## I. INTRODUCCION

1. En su decisión 45/457 B, de 13 de septiembre de 1991, y su resolución 46/79 A, de 13 de diciembre de 1991, la Asamblea General, entre otras cosas, pidió al Secretario General que continuara promoviendo los esfuerzos que llevaran a la eliminación del apartheid por medio de negociaciones legítimas, que se mantuviera informado activamente de los acontecimientos en Sudáfrica y que presentara un informe sobre los nuevos progresos logrados en la aplicación de la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional. Este informe se presenta en cumplimiento de esa petición.
2. En la preparación del informe, la Secretaría recabó las opiniones del Gobierno, de todos los partidos, movimientos y organizaciones políticas, así como de varios otros interlocutores con quienes se reunieron los grupos de las Naciones Unidas en Sudáfrica durante 1992. Se les invitó a que transmitiesen hasta el 5 de octubre de 1992 a más tardar sus criterios respecto de la situación general en Sudáfrica y de cualquier adelanto que se lograra en la aplicación de la Declaración. En el anexo I del presente informe figura un análisis, basado primordialmente en esas opiniones.
3. Durante el año, el Secretario General tuvo varias oportunidades de conversar con el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y el Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas acerca de la evolución de la situación en Sudáfrica, en particular el proceso de negociaciones en curso en ese país. El Secretario General se reunió también con el Presidente del Congreso Nacional Africano (ANC), Sr. Nelson Mandela, con el Presidente del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), Sr. Clarence Makwetu, y con el Jefe Mangosuthu Buthelezi, Presidente del Partido de la Libertad Inkatha, quienes le proporcionaron una evaluación de la situación y le comunicaron la posición de sus movimientos respecto de los acontecimientos en Sudáfrica. Asimismo, el Secretario General estuvo representado, en condición de observador, en los períodos plenarios de sesiones primero y segundo de la Convención para una Sudáfrica Democrática (COSADE), que se celebraron en diciembre de 1991 y mayo de 1992, respectivamente. Además, el Representante Especial del Secretario General, Sr. Cyrus Vance, visitó Sudáfrica en julio de 1992, en cumplimiento de la resolución 765 (1992) del Consejo de Seguridad. El Sr. Virendra Dayal, Enviado Especial del Secretario General, visitó Sudáfrica en septiembre de 1992 para proseguir las conversaciones con las partes pertinentes respecto de la aplicación de la resolución 772 (1992) del Consejo de Seguridad.
4. Asimismo, el Secretario General señaló a la atención de los órganos y organismos especializados interesados de las Naciones Unidas algunas disposiciones de la resolución 46/79 A, de 13 de diciembre de 1992. En un informe separado que se presentará a la Asamblea General se proporcionarán detalles sobre las medidas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas a fin de cumplir esas disposiciones.

## II. OBSERVACIONES DEL SECRETARIO GENERAL

5. Pese a los progresos alcanzados en las negociaciones iniciadas en el primer período de sesiones plenarias de COSADE, en diciembre de 1991, el segundo período de sesiones plenarias de COSADE terminó en un estancamiento dado que no fue posible llegar a ningún acuerdo sobre arreglos para el período de transición y tampoco sobre el establecimiento de un gobierno provisional. Tras la interrupción de las negociaciones multilaterales, la intensificación de la violencia política agravó aún más la situación. La matanza en la barriada de Boipatong, el 17 de junio de 1992, así como los incidentes de violencia posteriores, incluida la tragedia en Bisho (Ciskei), el 7 de septiembre de 1992, centraron la atención en la imperiosa necesidad de poner fin a la violencia y de facilitar una transición pacífica hacia una Sudáfrica democrática, no racial y unida.
6. Tras la visita a Sudáfrica de mi Representante Especial, Sr. Cyrus Vance, a fines de julio de 1992, y de conformidad con la resolución 765 (1992) del Consejo de Seguridad, formulé recomendaciones concretas 1/ dentro del marco de esa resolución para contribuir a que se pusiera fin efectivamente a la violencia y se establecieran las condiciones necesarias para la reanudación de las negociaciones multilaterales. Posteriormente, en su resolución 772 (1992), el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, instó al Gobierno de Sudáfrica y a todas las partes en Sudáfrica a que pusieran en práctica con urgencia las recomendaciones pertinentes que figuraban en mi informe, y me autorizó a que desplegara observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica. Mi Enviado Especial, Sr. Virendra Dayal, visitó Sudáfrica entre el 16 y el 26 de septiembre de 1992 a fin de proseguir las consultas con las partes interesadas respecto de esta resolución, así como sobre la reciente evolución política en el país.
7. A petición de las partes, en la primera semana de agosto de 1992 fueron desplegados 10 observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica para que tomaran nota de las actividades de masas organizadas por el ANC. Hay consenso acerca de que la presencia de los 10 observadores de las Naciones Unidas causó en general un efecto positivo en la situación política durante ese período. A fines de octubre de 1992, se habían desplegado 44 observadores de las Naciones Unidas, de conformidad con las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad. Los observadores han sido bien recibidos por las estructuras establecidas en virtud del Acuerdo Nacional de Paz y están colaborando con ellas para tratar de resolver en forma eficaz las cuestiones que suscitan preocupación señaladas en mi informe al Consejo de Seguridad 1/. El Gobierno de Sudáfrica, así como las partes interesadas, han acogido con agrado la presencia y la contribución de los observadores en el proceso de paz. La misión de observadores de las Naciones Unidas está actuando con rapidez y eficacia, en colaboración estrecha con los observadores del Commonwealth y de la Comunidad Europea, así como de la Organización de la Unidad Africana (OUA), a fin de cumplir el mandato que se le ha encomendado.
8. La reunión del Presidente de Klerk y el Sr. Nelson Mandela, Presidente del ANC, celebrada el 26 de septiembre de 1992, representa un avance importante hacia la superación del estancamiento experimentado en el segundo período de sesiones plenarias de COSADE. En esa reunión se llegó a un acuerdo sobre cuestiones fundamentales relativas a la seguridad de los albergues, la

/...

liberación de todos los demás presos políticos y la prohibición de portar y exhibir armas peligrosas. También se convino en la necesidad de establecer una asamblea constituyente democrática y un órgano encargado de la elaboración de una constitución, así como de asegurar la continuidad constitucional durante el período de transición. Esos acuerdos representan avances muy halagüeños y deberían servir de base para impulsar el proceso de negociación. Sin embargo, me sigue preocupando en particular que el Jefe Mangosutho Buthelezi, Presidente del Partido de la Libertad Inkatha haya rechazado esos acuerdos. Teniendo en cuenta estos factores, he recalcado a todas las partes interesadas la necesidad de emprender esfuerzos nuevos y decididos para poner fin a la violencia y eliminar todos los obstáculos que aún quedan y que podrían impedir la reanudación de las negociaciones.

9. El acuerdo logrado entre el Presidente de Klerk y el Sr. Mandela debería acelerar el impulso hacia un cambio constructivo e inducir avances en la esfera constitucional. Sin embargo, todavía persisten grandes peligros, entre los que destacan la fragilidad de la situación política y la tendencia a recurrir a la intimidación y la violencia. Es indispensable que las partes políticas cumplan los compromisos que han contraído como signatarios del Acuerdo Nacional de Paz y del acuerdo provisional relativo a la celebración de demostraciones públicas convenido entre las partes sobre la base de las propuestas formuladas por la Comisión Goldstone. A este respecto, deseo insistir una vez más en que las autoridades sudafricanas tienen la obligación de mantener el orden público y de aplicar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y proteger los derechos de todos los sudafricanos de participar en actividades políticas pacíficas sin temor a la intimidación o la violencia. Todas las partes en Sudáfrica deben cooperar en la lucha contra la violencia y ejercer la máxima moderación a fin de contribuir a la terminación del ciclo de violencia.

10. Las Naciones Unidas, por intermedio de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, de sus fondos fiduciarios para Sudáfrica y de la red de organismos especializados, han participado activamente en actividades encaminadas a facilitar el retorno de los exiliados sudafricanos, la reintegración de los ex presos políticos en la sociedad sudafricana y la prestación de asistencia en materia de educación y capacitación a sudafricanos de sectores desfavorecidos, respectivamente. Además, las Naciones Unidas están preparadas para responder en forma concertada y a nivel de todo el sistema para tratar de superar las desigualdades económicas y sociales causadas por la prolongada práctica del racismo institucionalizado.

11. De hecho, la función de la comunidad internacional en el establecimiento de una Sudáfrica democrática y no racial sólo puede complementar el papel de los diferentes grupos políticos del país, cuya participación, buena voluntad y valor político son factores esenciales para alcanzar el éxito. La responsabilidad de llegar a un arreglo justo y duradero mediante negociaciones debe corresponder a los sudafricanos. Las Naciones Unidas, por su parte, proseguirán la búsqueda de medios creativos para asistir a todo el pueblo sudafricano en la consecución de los objetivos que ellos mismos han establecido y que la Asamblea General hizo suyos en 1989 por intermedio de su Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional.

#### Notas

Anexo I

ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA AL SECRETARIO GENERAL RESPECTO DE  
LA APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE EL APARTHEID Y SUS CONSECUENCIAS  
DESTRUCTIVAS PARA EL AFRICA MERIDIONAL

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. PREFACIO .....	1 - 2	6
II. PROGRESOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN CLIMA FAVORABLE A LAS NEGOCIACIONES .....	3 - 16	6
A. Liberación de todos los presos y detenidos políticos .....	3 - 7	6
B. Retirada de todas las tropas de las barriadas populares .....	8	7
C. Revocación de todas las leyes que tienen por objeto limitar la actividad política .....	9 - 13	7
D. Cesación de todos los juicios y ejecuciones por motivos políticos .....	14 - 16	8
III. OTROS ELEMENTOS PROPICIOS AL DEBATE POLITICO LIBRE Y EL PROCESO DE NEGOCIACIONES .....	17 - 31	8
A. Creación de una atmósfera libre de violencia .	18 - 29	8
B. Libertad de reunión y libertad de prensa .....	30 - 31	11
IV. CUESTIONES QUE PROMUEVEN U OBSTRUYEN EL PROCESO ENCAMINADO A PONER FIN AL <u>APARTHEID</u> .....	32 - 41	11
A. Eliminación de las bases del <u>apartheid</u> .....	32 - 35	11
B. Desigualdades socioeconómicas .....	36 - 41	12
V. DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACIONES .....	42 - 53	13
A. Principios contemplados en una nueva constitución .....	44 - 46	13
B. Mecanismos para la elaboración de una nueva constitución .....	47 - 50	14
C. Arreglos y modalidades para la transición hacia un nuevo orden democrático .....	51 - 53	14
VI. EXAMEN DE LA APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCION ...	54 - 64	15

## I. PREFACIO

1. A fin de facilitar la apreciación de los adelantos logrados en el desmantelamiento del apartheid, en el presente informe se fija como punto de partida la situación que existía en Sudáfrica en septiembre de 1991.

2. Este informe se basa en las presentaciones escritas enviadas a la Secretaría hasta el 5 de octubre de 1992 por el Gobierno, así como por varios partidos y movimientos políticos y otras organizaciones interesadas 1/. En muchos casos, estas presentaciones fueron complementadas por declaraciones oficiales y comunicados de prensa.

## II. PROGRESOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN CLIMA FAVORABLE A LAS NEGOCIACIONES

### A. Liberación de todos los presos y detenidos políticos

3. En el inciso a) del párrafo 6 de la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional que figura en el anexo de la resolución S-16/1 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1989, la Asamblea General hace un llamamiento al Gobierno de Sudáfrica para que proceda a "liberar incondicionalmente a todos los presos y detenidos políticos y abstenerse de imponerles restricciones". Aunque en 1991 fueron liberados unos 1.000 presos políticos, la liberación de dichos presos cesó virtualmente desde la primera mitad de 1992. Un año después del plazo acordado en la Minuta de Pretoria para la liberación de todos los presos políticos, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica indicaba que quedaban unos 400 presos políticos 2/.

4. En su informe al Consejo de Seguridad basado en las conclusiones del Representante Especial Sr. Cyrus Vance 3/, el Secretario General recomendó la inmediata liberación de todos los presos políticos, "promoviendo [así] la confianza y sepultando el pasado lleno de desdichas". En respuesta a esta recomendación, el Gobierno de Sudáfrica propuso una amnistía general para todos los delitos políticos cometidos por las fuerzas de seguridad o por las fuerzas contra el apartheid antes de 1990.

5. El Congreso Nacional Africano (ANC) rechazó la propuesta y la vinculación de la amnistía al tema de los presos políticos. Manifestó que sólo un gobierno no racial y democráticamente electo podría decretar una amnistía.

6. El 26 de septiembre de 1992, después de una reunión celebrada entre el Presidente de Klerk y el Presidente del ANC Nelson Mandela, el Gobierno de Sudáfrica anunció la inmediata liberación de 150 presos políticos. El resto de los presos políticos serían liberados alrededor del 15 de noviembre de 1992 4/. En la presentación de este informe, el CNA hizo hincapié en que debía liberarse también "a los presos en los llamados bantustanes independientes".

### Regreso de los exiliados

7. Se ha avanzado mucho en lo que respecta al regreso de los exiliados políticos, lo que se considera como otro elemento importante que ayudaría a crear condiciones favorables para las negociaciones. Hacia fines de agosto de 1992, más de 5.236 exiliados habían regresado a Sudáfrica bajo los auspicios del programa emprendido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Comité Nacional de Coordinación para la Repatriación de los Exiliados también había dispuesto el regreso de otros 7.226 exiliados 5/.

### B. Retirada de todas las tropas de las barriadas populares

8. En el inciso c) del párrafo 6 de la Declaración, la Asamblea General hace un llamamiento al Gobierno para que retire "a todas las tropas de las barriadas populares". El Gobierno de Sudáfrica ha continuado desplegando tropas en las barriadas populares a petición de las autoridades policiales. El Ministro de Orden Público, Sr. Hernus Kriel, anunció a fines de julio de 1992 que se desplegarían 5.000 policías y soldados en Boipatong, Soweto y otras barriadas populares 6/.

### C. Revocación de todas las leyes que tienen por objeto limitar la actividad política

9. En el inciso d) del párrafo 6 de la Declaración, la Asamblea General hizo un llamamiento al Gobierno para que revoque "todas las leyes que tienen por objeto limitar la actividad política". Ciertas disposiciones de la Ley de Seguridad Interna han sido enmendadas y otras quedaron intactas (véase A/45/1052, párrs. 50 y 51). Además, el Gobierno de Sudáfrica ha continuado declarando zonas de disturbios a una serie de barriadas populares de conformidad con la Ley de Seguridad Pública de 1953, que no ha cambiado; en los dos últimos años se han formulado 180 declaraciones de ese tipo, con lo cual se ha otorgado a la policía mayores poderes de emergencia en esas zonas 7/.

10. En su presentación, el ANC manifestó que subsistían en la legislación varias leyes y disposiciones relativas a la seguridad que limitaban las posibilidades de realizar actividad política libre y pacífica. Hizo un llamamiento sobre todo para que se dejara sin efecto la legislación represiva en los llamados territorios patrios independientes.

11. Las organizaciones contra el apartheid expresaron su preocupación por la recientemente aprobada "Ley de Prohibición de la Intercepción y Vigilancia". De acuerdo con el movimiento Black Sash, esta Ley faculta a los Fiscales Generales a que otorguen poder a la policía, a la Fuerza de Defensa de Sudáfrica o a los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia para interceptar la correspondencia, intervenir teléfonos y colocar dispositivos de vigilancia en las viviendas 8/.

12. Otra disposición del proyecto de segunda enmienda de la Ley de Derecho Penal, que trata de la detención sin juicio por presuntas ofensas armadas, también fue criticado por las organizaciones contra el apartheid y, sobre todo, por el ANC 9/.

13. La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica ha expresado preocupación por la inclusión en la "Ley de Enmienda de la Policía" de febrero de 1992 de una cláusula que confiere poderes policiales totales (incluso detención y registro) a los miembros de las fuerzas de la policía de los territorios patrios cuando realizan operaciones transfronterizas.

D. Cesación de todos los juicios y ejecuciones  
por motivos políticos

14. En el inciso e) del párrafo 6 de la Declaración, la Asamblea General hace un llamamiento al Gobierno para que ponga fin "a todos los juicios y ejecuciones por motivos políticos".

15. Según la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, actualmente hay todavía más de 130 juicios políticos en curso, que afectan a más de 2.000 acusados 10/.

16. Con respecto a las ejecuciones, durante el período que se examina no se ha denunciado ninguna. El Ministerio de Justicia de Sudáfrica anunció en marzo de 1992 que vanudaría las ejecuciones; sin embargo, dejó sin efecto esta decisión a raíz de las protestas de las organizaciones de derechos humanos. El Gobierno de Sudáfrica reafirmó su decisión anterior de suspender la ejecución de las sentencias de muerte hasta ver el resultado de los debates sobre un proyecto de ley provisional sobre los derechos fundamentales 11/. Sin embargo, se siguen dictando sentencias de muerte y durante los ocho meses de 1992 ya se han dictado 23 de esas sentencias. La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica dijo en septiembre de 1992 que había 304 personas condenadas a muerte, de las cuales se consideraba que ocho eran presos políticos.

III. OTROS ELEMENTOS PROPICIOS AL DEBATE POLITICO  
LIBRE Y EL PROCESO DE NEGOCIACIONES

17. En el párrafo 7 de la Declaración, la Asamblea General establece como uno de los objetivos la creación del "clima apropiado para el debate político libre, condición indispensable para garantizar que el pueblo mismo participe en el proceso de reconstrucción de su país". Se ha visto que hay tres elementos que están directamente relacionados con el tema del debate y la actividad política libre: derecho a no sufrir violencia, libertad de reunión y libertad de prensa (véase A/44/960, anexo I, párr. 87).

A. Creación de una atmósfera libre de violencia

18. La Asamblea General reconoció en la Declaración que los progresos de las negociaciones dependerían de que hubiera una atmósfera libre de violencia. El párrafo 8 de la Declaración dice que las partes interesadas deben negociar



"en una atmósfera que, por acuerdo mutuo entre los movimientos de liberación y el régimen de Sudáfrica, esté libre de violencia". En el segundo informe sobre los progresos logrados (A/45/1052, párrafos 59 a 68) se analizaron el grado de la violencia, sus causas y las iniciativas tomadas para luchar contra ella. En el período que se examina, sigue siendo motivo de grave preocupación la intensificación de la violencia en Sudáfrica que está causando grandes pérdidas de vida humanas, así como sus consecuencias para el proceso de negociación y sus efectos nocivos sobre la economía. Las exposiciones presentadas a la Secretaría han reflejado esa preocupación y han hecho mucho hincapié en la cuestión de la violencia.

19. El Acuerdo Nacional de Paz, firmado el 14 de noviembre de 1991, constituye un marco general para poner fin a la violencia porque lo han firmado, entre otros, los principales partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones religiosas y cívicas. Además de prever la creación de mecanismos en los planos local, regional y central, el Acuerdo contiene también un código de conducta para las organizaciones y los partidos políticos, con el propósito de poner fin a la violencia y promover la paz y la reconstrucción. El Acuerdo se apoya en tres componentes básicos principales, cada uno de los cuales tiene una sola función, independientes pero complementaria de los otros dos:

a) El Comité Nacional de Paz supervisa el proceso de paz tal como se dispone en el Acuerdo de Paz, lo hace público y aplica el código de conducta para los partidos políticos. Sus objetivos son vigilar la aplicación del Acuerdo de Paz, formular recomendaciones al respecto y velar por que las organizaciones y los partidos políticos se atengan al código de conducta. El Presidente del Comité es el Sr. John Hall;

b) La Comisión Goldstone (Comisión Goldstone de Investigación sobre prevención de la violencia e intimidación públicas) investiga el fenómeno de la violencia e intimidación públicas y da a conocer sus antecedentes y sus motivos. Las actuaciones son similares a actos de procedimiento y los miembros de la Comisión son juristas. El Presidente es el Magistrado Richard Goldstone;

c) La Secretaría Nacional de Paz está encargada de evitar actos de violencia que puedan producirse en el futuro, recurriendo a la mediación y a la facilitación por conducto de diversos comités que se ocupan de la resolución de controversias. La función de la Secretaría es establecer comités regionales para la resolución de controversias y ayudar a estos comités a establecer comités locales para la resolución de controversias.

20. Tras la aprobación de la resolución 772 (1992) del Consejo de Seguridad, se creó en Sudáfrica una Misión de Observadores de las Naciones Unidas que colabora estrechamente con otros observadores del Commonwealth, de la Comunidad Europea y de la Organización de la Unidad Africana (OUA). Hasta la fecha, se han enviado 44 observadores de las Naciones Unidas a Sudáfrica a fin de que recorran todo el país. La Misión de Observadores de las Naciones Unidas trabaja en coordinación con las estructuras establecidas en virtud del Acuerdo Nacional de Paz.

21. La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica notificó de que mientras en los 12 meses anteriores a la firma del Acuerdo habían fallecido 2.649 personas a causa de la violencia política, fallecieron más de 3.400 al año siguiente 12/.

22. El ANC, el Partido Laboral y otras organizaciones han acusado al Gobierno de Sudáfrica de no actuar con eficiencia e imparcialidad para poner fin a la violencia. También han expresado su firme convencimiento de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han participado, abierta y encubiertamente, en actos de violencia. El ANC subraya en la información presentada que no se ha logrado el clima libre de violencia previsto en la Declaración y que la principal responsabilidad en cuanto al mantenimiento de la paz incumbe al Gobierno actual.
23. Al respecto, en el período que se examina se publicaron varios informes en los que se criticaba al Gobierno de Sudáfrica por su incapacidad para poner fin a la violencia y se destacaba el papel que habían tenido en ella los miembros de las fuerzas de seguridad y del Partido de la Libertad Inkatha. Los informes más interesantes fueron el de Amnistía Internacional, titulado "South Africa: State of Fear", y el de la Comisión Internacional de Juristas, titulado "Agenda for Peace".
24. En abril de 1992, la Comisión Goldstone publicó su segundo informe provisional en el que se declaraba no haber recibido pruebas de la existencia de una "tercera fuerza" que organizara actos de violencia y que "tanto el Congreso Nacional Africano como el Partido de la Libertad Inkatha habían sido culpables de muchos incidentes a consecuencia de los cuales muchísimas personas habían resultado muertas o heridas". Se criticaba también al Gobierno por no haber tomado firmes medidas para impedir la conducta delictiva de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y castigar a los delincuentes 13/.
25. La Comisión ha recomendado en numerosas ocasiones que se prohíba llevar armas peligrosas en público y que se vigilen los albergues cuyos ocupantes hayan participado en actos de violencia.
26. A principios de 1992, los investigadores de la Comisión Internacional de Juristas concluyeron después de su misión a Sudáfrica que a la sazón, en las zonas que habían visitado no sería posible celebrar elecciones libres y justas sobre la base del principio de un voto por persona.
27. En la exposición que presentó para este informe, el Gobierno de Sudáfrica indicó que el programa de movilización de masas de la alianza del ANC y el Partido Comunista de Sudáfrica había aumentado las tensiones y que sus actividades se habían programado sólo para ganar poder valiéndose de medios no democráticos. En opinión del Gobierno, las causas principales de la violencia eran la lucha por el poder entre el ANC y el Partido Inkatha, el papel de los extremistas, el aumento del desempleo y la disponibilidad de armas.
28. En agosto de 1992, el Ministro de Orden Público Hernus Kriel anunció que se habían lanzado iniciativas a fondo para restablecer la credibilidad de la policía sudafricana. Entre esas medidas se hallaban la dimisión o la jubilación anticipada de varios generales y la creación de un órgano que se encargaría de investigar los delitos presuntamente cometidos por la policía 14/.
29. En la exposición que presentó para este informe, el Congreso Panafricanista de Azania (PAC) declaró que si bien el reconocimiento de la existencia del racismo era una primera medida importante para resolver el problema, las medidas

anunciadas no abordaban el verdadero problema; añadió que sólo un gobierno democrático elegido por la mayoría podía organizar un nuevo cuerpo de policía legítimo que inspirara confianza. Por su parte, el ANC describió las medidas como cambios superficiales en lugar de sustantivos.

#### B. Libertad de reunión y libertad de prensa

30. En el período que se examina, ninguna organización estuvo prohibida o proscrita. Sin embargo, en virtud de la Ley de Seguridad Interna el Gobierno conservó su autoridad legal para controlar las reuniones públicas.

31. En relación con la libertad de prensa, en 1992 se recibió con agrado la derogación de la sección 27.B de la Ley de Policía de 1958, en virtud de la cual se habían limitado muchísimo las informaciones en los medios de difusión sobre las acciones de la policía. Aunque a principios de 1992 el primer Grupo de Trabajo de la Convención para una Sudáfrica Democrática (COSADE) logró un consenso sobre la necesidad de establecer un órgano independiente y neutral que se encargara de la vigilancia de las empresas de radiodifusión, la South African Broadcasting Corporation sigue teniendo el mismo estatuto.

### IV. CUESTIONES QUE PROMUEVEN U OBSTRUYEN EL PROCESO ENCAMINADO A PONER FIN AL APARTHEID

#### A. Eliminación de las bases del apartheid

32. En el segundo informe sobre los progresos logrados (A/45/1052, párrs. 73 a 85) se trató con amplitud de la derogación de las leyes básicas del apartheid efectuada en 1991.

33. En la exposición que presentó para este informe, el Partido Laboral expresó la opinión de que aún subsistían vestigios de la odiada Ley de limitación de zonas. También señaló que los gobiernos locales seguían reconociendo las estructuras raciales y que las elecciones parlamentarias y las elecciones locales extraordinarias aplicaban criterios raciales 15/.

34. El movimiento Black Sash criticó las nuevas leyes promulgadas sobre asuntos relativos a las autoridades provinciales y locales, por las que se da mayor autoridad a los administradores locales. También subrayó que el reclutamiento en Sudáfrica era sólo para los blancos 16/.

35. En la exposición que presentó para este informe, el ANC subrayó que aún no se había alcanzado el objetivo fundamental establecido en la Declaración de que Sudáfrica se transforme en un país unido, democrático y sin distinciones raciales. Añadió que Sudáfrica seguía siendo un país gobernado por un régimen de mayoría blanca y que la inmensa mayoría de los habitantes no disfrutaban todavía del derecho de votar ni del de ser elegidos miembros de órganos del Gobierno.

B. Desigualdades socioeconómicas

36. En la exposición que presentó para este informe, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Independiente indicó que el constante deterioro económico en el país estaba estrechamente vinculado a la violencia y a la incertidumbre que ésta provocaba 17/. De hecho, la inestabilidad política y el estancamiento económico en el país están muy relacionados. La violencia política sigue minando la confianza de los inversionistas, mientras que el deterioro de las condiciones de vida y el legado de décadas de apartheid contribuyen a debilitar la estructura de la sociedad sudafricana convirtiéndola en un terreno propicio a la violencia.
37. La gravedad creciente de la crisis en las esferas del trabajo, la educación, la vivienda y la salud sigue siendo motivo de intenso debate en el país. En los dos informes anteriores (A/44/960 y A/45/1052) se expusieron las opiniones de los partidos políticos y otras organizaciones contra el apartheid.
38. El Gobierno de Sudáfrica, en la exposición que presentó para este informe, se refirió a varias medidas que ha tomado para mejorar las condiciones socioeconómicas. Destaca en particular su dedicación a establecer un sistema de enseñanza único y no discriminatorio basado en una distribución equitativa de los gastos. También mencionó un informe publicado en mayo de 1992 por la Comisión de Vivienda Nacional en el que se hicieron recomendaciones para agrupar recursos financieros destinados a la construcción de viviendas. El Gobierno de Sudáfrica indicó que en el ejercicio económico en curso había asignado 2.100 millones de rand a la construcción de viviendas.
39. Con referencia a la cuestión de la salud, el Gobierno de Sudáfrica declaró que había adoptado varias iniciativas para hacer mayor hincapié en los servicios primarios de salud. Esas iniciativas abarcan la transferencia de servicios a las autoridades locales y la asignación de 38 millones de rand al establecimiento de dispensarios de atención primaria de la salud. Además, el Gobierno de Sudáfrica ha aportado en un período de dos años 660 millones de rand, que ha destinado a un programa de fomento de la nutrición.
40. En relación con la situación laboral, el Gobierno de Sudáfrica se refirió a varias medidas que ha tomado para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de Libertad Sindical establecida por la OIT, que visitó Sudáfrica en febrero de 1992. Entre esas medidas cabe mencionar la decisión de promulgar leyes que ampliasen el alcance de la Ley de condiciones básicas de empleo a trabajadores nacionales y rurales. En cuanto a la reestructuración de la Comisión Nacional de la Mano de Obra, el Gobierno dijo que se había creado un grupo de trabajo tripartito para estudiarla.
41. El Gobierno de Sudáfrica expresó su convencimiento de que, aparte de esas medidas, la economía del país necesitaba insumos externos que fomentasen el crecimiento necesario para salir de la desaceleración económica causada por la sequía y la recesión. En consecuencia, pidió asistencia internacional para complementar sus programas relativos a la creación de empleo, enseñanza, vivienda y centros médicos.

## V. DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACIONES

42. En el párrafo 8, la Declaración estableció directrices para el proceso de negociaciones en Sudáfrica. La Declaración consideró que el proceso podría iniciarse sobre la base de acuerdos en los siguientes temas: a) el mecanismo para la redacción de una nueva constitución; b) el papel de la comunidad internacional en lo relativo a garantizar una transición con éxito hacia el orden democrático, y c) arreglos y modalidades necesarios para la transición, incluida la celebración de elecciones.

43. Después de un amplio debate público sobre el contenido del proceso de negociaciones y sobre los mecanismos para la transición hacia una Sudáfrica democrática y no racial, se celebró el primer período de sesiones de la Convención para una Sudáfrica Democrática (COSADE) en diciembre de 1991. Se lograron apreciables progresos en las negociaciones entabladas en el marco de la COSADE y en las conversaciones bilaterales entre los partidos (véanse A/47/215; A/47/217 y A/47/494).

### A. Principios contemplados en una nueva constitución

44. El consenso alcanzado previamente sobre principios constitucionales generales resultó fortalecido con la adopción por parte de la COSADE I de la Declaración de Intención (véase el anexo II). En esta Declaración, los participantes se comprometieron a "crear un Africa del Sur indivisa y libre del apartheid" y a respetar principios constitucionales fundamentales. Entre ellos estaba el principio de que la constitución debía ser la ley suprema, preservada mediante un poder judicial independiente, no racial e imparcial. Debía haber una separación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y un poder judicial imparcial. Sudáfrica debía ser una democracia multipartidista, en la que el sistema electoral básico fuera el de la representación proporcional. En la Declaración se reconocía también la diversidad de lenguas, culturas y religiones del pueblo sudafricano, cuyos derechos humanos debían quedar salvaguardados por una Declaración de Derechos 18/.

45. El Congreso Nacional Africano (ANC) indicó en su presentación que la ruptura de las negociaciones produciría en el segundo período plenario de sesiones de la COSADE, en mayo de 1992, ponía de relieve que todos los partidos participantes en esas negociaciones debían comprometerse a llevar a la práctica el proyecto que entrañaban los principios constitucionales contenidos en la Declaración. A menos que empezaran a transitar desde ese punto de partida y no hicieran nada por subvertir esos principios, los partidos participantes en las negociaciones jamás podrían llegar a un acuerdo que pusiera término efectivamente al sistema de apartheid y transformara a Sudáfrica en una democracia no racial.

46. A juicio del Gobierno de Sudáfrica, el modelo de Westminster, al que el ANC asigna tanta importancia, no puede funcionar en ese país. Por consiguiente, el Gobierno de Sudáfrica aboga por un sistema basado en principios federales orientados hacia la descentralización y la asignación de poder a gobiernos

regionales fuertes. Reconoce, sin embargo, que la asignación de poder a escala regional continúa siendo causa de importantes divergencias políticas entre los partidos.

B. Mecanismos para la elaboración de una nueva constitución

47. Con respecto al mecanismo encargado de redactar una nueva constitución, la COSADE II llegó a un punto muerto como consecuencia de la imposibilidad de arribar a un acuerdo respecto del informe del Grupo de Trabajo II sobre cuestiones relativas a la redacción de la constitución. Habida cuenta de que los temas considerados por los cinco grupos de trabajo estaban interrelacionados (véase A/47/215), se decidió que, a raíz de la falta de acuerdo en el Grupo de Trabajo II, no se presentara ninguno de los informes a consideración de la COSADE II. Los partidos decidieron asimismo que su Comité de Administración fuera el principal responsable de resolver las diferencias existentes y de instituir un mecanismo encargado de redactar todos los proyectos de ley que se necesitaren como resultado de los acuerdos concertados.

48. El Presidente del Estado, Sr. de Klerk, y el Presidente del Congreso Nacional Africano (ANC), Sr. Nelson Mandela, se reunieron el 26 de septiembre de 1992 con el objeto de abordar el problema de la violencia y los obstáculos que obstaculizaban las negociaciones. El Acta de Entendimiento en la que se convino en esa reunión (véase el anexo III) incluía, entre otras cosas, un acuerdo acerca de la necesidad de contar con una Asamblea Constituyente o un órgano encargado de redactar la constitución, que tuvieran carácter democrático, y que ese carácter requiera: a) que dicho órgano fuera elegido democráticamente; b) que elaborara y aprobara la nueva constitución, lo que significaba que deliberaría en régimen unicameral; c) que supeditara su labor exclusivamente a los principios constitucionales acordados; d) que llevara a cabo su labor dentro de plazos fijados; e) que dispusiera de mecanismos adecuados para superar estancamientos; f) que funcionara en forma democrática, esto es, que adoptara sus decisiones democráticamente en función de las mayorías convenidas, y g) que fuera elegido dentro del plazo predeterminado en que se hubiera convenido 4/.

49. El 29 de septiembre de 1992, los líderes de Bophuthatswana, Ciskei y KwaZulu emitieron un comunicado conjunto en el que se rechazaba el Acta de Entendimiento convenida entre el Gobierno de Sudáfrica y el Congreso Nacional Africano.

50. En su presentación del tema, el Congreso Panafricanista de Azania (PAC) reafirmó su posición de que el único mecanismo democrático para redactar la nueva constitución no racial y democrática era una asamblea constituyente elegida libremente.

C. Arreglos y modalidades para la transición hacia un nuevo orden democrático

51. Tras el estancamiento que sufrió la COSADE II, el Presidente del Estado, Sr. de Klerk, y el Presidente del Congreso Nacional Africano, Sr. Nelson Mandela, consideraron una vez más la posibilidad de recurrir a

arreglos de transición en la reunión en la cumbre que celebraron el 26 de septiembre de 1992. El Gobierno y el Congreso Nacional Africano convinieron en que durante el período provisional o de transición debía mantenerse la continuidad constitucional y evitarse el hiato constitucional. Teniendo en cuenta los principios aceptados, convinieron además en que: a) el órgano encargado de formular la constitución o la asamblea constituyente funcionaría también como Parlamento provisional o de transición; b) habría un gobierno provisional o de transición de unidad nacional; c) el órgano encargado de formular la constitución o la asamblea constituyente, junto con el Parlamento provisional o de transición y el gobierno provisional o de transición de unidad nacional, funcionarían dentro de un marco constitucional o constitución de transición, que establecería un gobierno nacional y regional durante el período de transición y consagraría derechos y libertades fundamentales, con las garantías justiciables pertinentes. El Parlamento provisional o de transición podría funcionar en régimen unicameral o bicameral.

52. Con respecto al problema de la transición, el Gobierno de Sudáfrica, en su presentación, puso de relieve que tenía la responsabilidad de continuar gobernando el país de conformidad con la constitución en vigor hasta que fuere reemplazada por una constitución de transición. También señaló que si la constitución de transición no hubiere sido reemplazada por una constitución definitiva en un plazo de tres años, se celebrarían elecciones generales para elegir un nuevo Parlamento de transición.

53. En la presentación que efectuó para el presente informe, el PAC reiteró su compromiso de respetar los principios de la declaración aprobada por la Conferencia del Frente Patriótico y el Frente Unido, celebrada en octubre de 1991. La Declaración pide un gobierno provisional o autoridades de transición que sean soberanos y que por lo menos se encarguen del control de las fuerzas de seguridad y cuestiones conexas, del proceso electoral y de los medios de comunicación estatales, así como de la definición de aspectos del presupuesto y las finanzas y de la obtención de la participación internacional.

## VI. EXAMEN DE LA APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCION

54. Con la adopción de la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional, los Estados Miembros se comprometieron a aplicar el Programa de Acción incluido en ella. Este Programa de Acción se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos: a) la comunidad internacional debe seguir ocupándose de la cuestión de una solución política de la cuestión de Sudáfrica; b) debe reforzar el apoyo global a los opositores del apartheid, y c) debe utilizar medidas concertadas y eficaces a fin de ejercer presión para lograr la pronta eliminación del apartheid y velar por que no cese la aplicación de las medidas existentes hasta que haya pruebas claras de cambios profundos e irreversibles, teniendo presentes los objetivos de la Declaración.

55. En su resolución 46/79 A de 13 de diciembre de 1991, aprobada por consenso, la Asamblea General hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyara este Programa de Acción.

56. Durante el período que se examina, los acontecimientos ocurridos en Sudáfrica siguieron en el centro de atención de la comunidad internacional, que continuó vigilando muy de cerca su evolución. La comunidad internacional acogió con satisfacción el proceso político que condujo a la convocación de la COSADE, a la que consideró un ámbito viable para reunir al amplio espectro de representantes del pueblo sudafricano. También expresó su preocupación por la escalada de violencia política en el país e instó a todas las partes interesadas a desplegar renovados esfuerzos por alcanzar un acuerdo respecto de arreglos de transición, incluido el establecimiento de un gobierno provisional.

57. El mayor interés de la comunidad internacional en facilitar la transición hacia una nueva Sudáfrica se puso de relieve particularmente en las resoluciones 765 (1992) y 772 (1992) aprobadas por unanimidad por el Consejo de Seguridad, y en las misiones enviadas a Sudáfrica por el Secretario General. El establecimiento de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Sudáfrica en septiembre de 1992 también subraya la creciente importancia del papel desempeñado por la comunidad internacional en el proceso de paz.

58. Con respecto a la presencia de los observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica, el Gobierno de este país señaló, en su contribución para el presente informe, que confiaba en entablar una relación constructiva con la Misión de Observación y con los observadores de la Comunidad Europea (CE), la Organización de la Unidad Africana (OUA) y el Commonwealth 19/. El ANC, por su parte, expresó su reconocimiento por la rápida y oportuna intervención del Secretario General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para colaborar en la consideración del problema de la violencia y de otros obstáculos que se oponen al proceso de negociaciones.

59. En una reunión celebrada en Arusha el 28 de abril de 1992, el Comité Especial de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Africa Meridional expresó su satisfacción por las negociaciones que se estaban celebrando en la COSADE e instó a los movimientos de liberación y a todas las fuerzas democráticas a recurrir a ese foro para acelerar el advenimiento de una Sudáfrica no racial y democrática. También señaló que el establecimiento de un gobierno provisional y la celebración de elecciones libres y equitativas podrían marcar el comienzo de un proceso irreversible encaminado a terminar con el apartheid. Exhortó a todas las partes en el Acuerdo Nacional de Paz a adoptar todas las providencias necesarias para poner fin a la absurda violencia desatada en las barriadas populares 20/. El Consejo de Ministros de la OUA, reunido en Dakar, Senegal, en junio de 1992, analizó la creciente violencia que azotaba a Sudáfrica y pidió al Consejo de Seguridad que se reuniera urgentemente para examinar esta cuestión y adoptar las medidas conducentes a poner término a la violencia y a crear las condiciones necesarias para la reanudación de las negociaciones. De conformidad con la decisión del Consejo de Ministros, una misión de investigación de la OUA visitó Sudáfrica en septiembre de 1992. Posteriormente, en ese mismo mes, OUA decidió enviar a Sudáfrica a un grupo de observadores para que trabajara en cooperación con la Misión de Observación de las Naciones Unidas.

60. En septiembre de 1992 una misión de investigación de la Comunidad Europea visitó Sudáfrica. Se reunió con representantes del Gobierno y de los movimientos de liberación para facilitar la reanudación de las negociaciones.



Finalizada esta misión, la Comunidad Europea decidió enviar a unos 15 observadores para que se sumaran a los demás observadores internacionales.

61. En su reunión celebrada en Harare en octubre de 1991, los Jefes de Gobierno del Commonwealth hicieron suyo un "enfoque programado de gestión", en que se vinculaba cualquier cambio en la aplicación de sanciones con la adopción de medidas reales y prácticas para poner fin al apartheid. En julio de 1992, el Secretario General del Commonwealth visitó Sudáfrica para entrevistarse con el Presidente de Klerk, el Presidente del ANC Nelson Mandela y otros líderes políticos. Tras esta visita, en septiembre de 1992 el Commonwealth anunció su decisión de enviar un equipo de observadores a Sudáfrica. La misión de observación se encargaría de efectuar una contribución práctica para poner fin a la violencia y promover la creación de un entorno propicio para la iniciación de las negociaciones 21/. Este equipo cooperará estrechamente con la Misión de Observación de las Naciones Unidas para llevar a la práctica la resolución 772 (1992) del Consejo de Seguridad.

62. Durante el período en examen, la comunidad internacional y la mayor parte de las organizaciones intergubernamentales continuaron prometiendo y promoviendo asistencia a las fuerzas democráticas y a los sectores desfavorecidos de la población de Sudáfrica; la Comunidad Europea, por ejemplo, aportó 2,6 millones de rand en apoyo de programas para casos de emergencia destinados a proporcionar un abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente a comunidades rurales afectadas por la sequía.

63. La Conferencia Tripartita sobre el Africa Meridional, celebrada en Harare en mayo de 1992 bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), decidió que los programas de asistencia para la educación de los trabajadores debían ampliarse y adaptarse a las necesidades del período de transición y de la etapa posterior al apartheid. Instó a que se brindara el máximo apoyo al movimiento sindical democrático no racial mediante las actividades de la OIT para la educación de los trabajadores. Recomendó asimismo que se establecieran programas de asistencia a las organizaciones patronales democráticas y no raciales 22/.

64. En lo que se refiere al ejercicio de presión sobre el Gobierno de Sudáfrica, la Asamblea General, en su cuadragésimo sexto período de sesiones, aprobó por consenso la resolución 46/79 A, de 13 de diciembre de 1991. En la resolución se exhortaba a la comunidad internacional a que reanudara "los vínculos académicos, científicos y culturales con los elementos democráticos - sean organizaciones o particulares - contrarios al apartheid en esas esferas"; que reanudara "los vínculos deportivos con las organizaciones deportivas unificadas no raciales de Sudáfrica" y que reexaminara "las medidas restrictivas en vigor en función de los acontecimientos positivos" que se produjeran. Después de la COSADE I y del referendo entre blancos celebrado en marzo de 1992, diversos gobiernos de diferentes regiones del mundo consideraron conveniente levantar algunas de sus medidas restrictivas, a menudo excediéndose respecto de lo recomendado en la resolución. En su presentación para el presente informe, el ANC instó a la comunidad internacional a mantener las medidas en vigor contra el apartheid y a modificar el statu quo únicamente de conformidad con las resoluciones sobre el apartheid aprobadas por la Asamblea General en su último período de sesiones.

Notas

1/ Para el 5 de octubre de 1992, la Secretaría había recibido exposiciones del Gobierno de Sudáfrica y de los siguientes partidos políticos, movimientos y organizaciones:

Congreso Nacional Africano (ANC);

Black Sash;

Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica;

Consortio de Desarrollo Independiente;

Partido del Trabajo de Sudáfrica;

Congreso Panafricanista de Azania (PAC);

Cámara de Comercio de Sudáfrica.

2/ Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, Human Rights Update, mayo de 1992.

3/ S/23489.

4/ Presidente F. W. de Klerk y Nelson Mandela, Acta de Entendimiento, 26 de septiembre de 1992 (véase el anexo III del presente documento).

5/ Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, South Africa Repatriation Operation: Situation Report, No. 26, 24 de agosto de 1992; y exposición del Gobierno de Sudáfrica de fecha 30 de septiembre de 1992.

6/ Stabilization operation in townships, declaración del Ministro de Orden Público, Sr. Hernus Kriel, 29 de julio de 1992.

7/ Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, Comunicado de prensa sobre el estado de emergencia larvado, 3 de agosto de 1992.

8/ Exposición del Black Sash, de fecha 21 de septiembre de 1992.

9/ Comunicado de prensa del Congreso Nacional Africano sobre legislación antilibertaria, 17 de junio de 1992.

10/ Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, Summary Report on Repression for the Month of August 1992.

11/ Declaración sobre la pena capital por el Ministro de Justicia, Sr. Kobie Coetsee, 27 de marzo de 1992.

12/ Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, Statement on the National Peace Accord, 14 de septiembre de 1992.

Notas (continuación)

13/ Comisión de Investigación sobre la prevención de la violencia e intimidación pública, segundo informe interino, abril de 1992.

14/ Law and Order: New Initiatives, declaración del Ministro de Orden Público, Sr. Hernus Kriel, 27 de agosto de 1992.

15/ Exposición del Partido del Trabajo, de fecha 2 de septiembre de 1992.

16/ Exposición del Black Sash, de fecha 4 de septiembre de 1992.

17/ Exposición del Consorcio de Desarrollo Independiente, de fecha 16 de septiembre de 1992.

18/ Convención para una Sudáfrica Democrática (COSADE), declaración de intención, 20 de diciembre de 1991 (véase el anexo II del presente documento).

19/ Exposición del Gobierno de Sudáfrica, de fecha 30 de septiembre de 1992.

20/ Comunicado del Comité Especial de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Africa Meridional de la Organización de la Unidad Africana (OUA), octavo período de sesiones, Arusha, 28 de abril de 1992.

21/ Reuter, 14 de septiembre de 1992.

22/ Conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Tripartita sobre Africa Meridional de la Organización Internacional del Trabajo, Harare, 5 a 8 de mayo de 1992.

Anexo II

DECLARACION DE INTENCION APROBADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1991  
POR LOS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA REUNION DE LA CONVENCION  
PARA UNA SUDAFRICA DEMOCRATICA

Nosotros, representantes debidamente autorizados de partidos políticos, organizaciones políticas, administraciones y el Gobierno de Sudáfrica, congregados en esta primera reunión de la Convención para una Sudáfrica Democrática, conscientes de la tremenda responsabilidad que pesa sobre nosotros en este momento de la historia de nuestro país, declaramos nuestro solemne empeño:

1. De crear una Sudáfrica indivisa con una nación que comparta una ciudadanía única, patriotismo y lealtad, persiguiendo en medio de nuestra diversidad la libertad, la igualdad y la seguridad para todos, sin consideración de raza, color, sexo o credo; un país libre del apartheid o de cualquiera otra forma de discriminación o de dominación.

2. De trabajar para sanar las divisiones del pasado, asegurar el progreso de todos y establecer una sociedad libre y abierta basada en los valores democráticos, en la que la dignidad, el valor y los derechos de todo sudafricano estén protegidos por la ley.

3. De esforzarnos por mejorar la calidad de la vida de nuestro pueblo mediante políticas que fomenten el crecimiento económico y el desenvolvimiento humano, y que aseguren igualdad de oportunidades y justicia social para todos los sudafricanos.

4. De crear un clima conducente a un cambio constitucional pacífico mediante la eliminación de la violencia, la intimidación y la desestabilización, y fomentando la libre participación política, la discusión y el debate.

5. De poner en marcha el proceso de elaboración y establecimiento de una Constitución que asegure, entre otras cosas:

a) Que Sudáfrica sea un Estado unido, democrático, sin distinción de razas ni sexo, en el que la autoridad soberana se ejerza sobre todo el territorio;

b) Que la Constitución sea la ley suprema y que sea preservada mediante un poder judicial independiente, no racial e imparcial;

c) Que exista una democracia multipartidista con el derecho a formar partidos políticos y a afiliarse a ellos, y con elecciones periódicas con base en el sufragio adulto universal con un registro común de votantes; en general, el sistema electoral básico debe ser el de la representación proporcional;

d) Que exista una separación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial con un sistema apropiado de controles y de equilibrios;

e) Que la diversidad de idiomas, culturas y religiones del pueblo sudafricano sea reconocida;

f) Que todos disfruten de los derechos humanos, las libertades y los derechos civiles, la libertad de religión, de palabra y de reunión protegidos por una bien garantizada y jurídicamente invocable Declaración de Derechos y por un sistema jurídico que garantice la igualdad de todos ante la ley.

Convenimos:

1. Que los participantes presentes y futuros deberán tener derecho a presentar libremente a la Convención cualesquiera propuestas que sean compatibles con la democracia.

2. Que la COSADE establecerá un mecanismo cuya tarea consistirá, en cooperación con las administraciones y con el Gobierno de Sudáfrica en redactar los textos de toda la legislación que sea necesaria para poner en vigor los acuerdos alcanzados en la COSADE.

Nosotros, los representantes de partidos políticos, organizaciones políticas y administraciones, afirmamos además nuestro solemne empeño de respetar los acuerdos de la COSADE y de tomar de buena fe todas cuantas medidas estén en nuestro poder y facultades para lograr su ejecución.

[Firmado] Congreso Nacional Africano, Gobierno del Ciskei, Partido Democrático, Partido Dikwankwetla, Movimiento Nacional Inyandza, Partido Intando Yesizwe, Partido del Trabajo de Sudáfrica, Congreso Indio de Natal/Transvaal, Partido Nacional, Partido Popular Nacional, Solidaridad, Partido Comunista Sudafricano, Gobierno del Transkei, Frente Popular Unido, Gobierno de Venda y Partido Progresista Ximoko

Nosotros, el Gobierno de Sudáfrica, nos declaramos vinculados por los acuerdos alcanzados juntamente con los otros participantes en la COSADE, de conformidad con las reglas en vigor y declaramos por la presente nuestro empeño de proceder a su aplicación en la medida de nuestra capacidad, poderes y autoridad.

[Firmado] Gobierno de Sudáfrica

Anexo III

DECLARACION CONJUNTA Y ACTA DE ENTENDIMIENTO, DADAS POR  
EL PRESIDENTE FREDERIK W. DE KLERK Y EL PRESIDENTE DEL  
ANC, SR. NELSON MANDELA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1992

Reunión entre el Presidente del Estado de Sudáfrica, y el Presidente  
del Congreso Nacional Africano, celebrada en el World Trade Center,  
el 26 de septiembre de 1992

1. Se convino en el Acta de Entendimiento que figura seguidamente.
2. Con miras al futuro:
  - Ambas delegaciones convinieron en que en la presente reunión en la cumbre se echaron las bases para reanudar el proceso de negociación.
  - A ese fin, la delegación del Congreso Nacional Africano (ANC) comunicó al Gobierno de Sudáfrica que recomendaría a su Comité Ejecutivo Nacional que se reanudase el proceso de negociación, a partir de lo cual se celebrarían amplias deliberaciones bilaterales.
  - Se convino en que los aspectos prácticos de las declaraciones bilaterales se atenderían por conducto de los cauces existentes.

ACTA DE ENTENDIMIENTO

1. A partir del 21 de agosto de 1992, el Sr. Roelf Meyer, Ministro de Desarrollo Constitucional, y el Sr. Cyril Ramaphosa, Secretario General del Congreso Nacional Africano, celebraron una serie de reuniones. En esas reuniones se deliberó con objeto de eliminar los obstáculos que impedían reanudar las negociaciones y se puso el acento en determinar las providencias que se adoptarían para resolver las cuestiones señaladas en memorandos anteriores. En dichas deliberaciones se tomó nota de los puntos de vista opuestos en cuanto a las cuestiones y los obstáculos pertinentes. Se decidió que esas cuestiones no se determinarían en forma exhaustiva en el entendimiento. El presente documento refleja el entendimiento a que se llegó respecto de esos obstáculos y cuestiones al término de dichas deliberaciones.

2. El entendimiento sobre cuestiones y obstáculos incluye lo siguiente, si bien se deja constancia de que existen todavía otras cuestiones importantes que serán objeto de atención en el curso del proceso de negociación:

a) El Gobierno y el ANC convienen en que se debe contar con una asamblea constituyente o un órgano encargado de formular la constitución, que tendrán carácter democrático, y en que para que sea democrático dicho órgano debe:

- Ser elegido democráticamente;
- Elaborar y aprobar la nueva constitución, lo que significa que deliberará en régimen unicameral;

- Subordinar su labor exclusivamente a los principios constitucionales acordados;
- Llevar a cabo su labor con arreglo a un plazo fijado;
- Disponer de mecanismos adecuados para superar estancamientos;
- Funcionar en forma democrática, esto es, adoptar sus decisiones democráticamente en función de las mayorías convenidas;
- Ser elegido dentro del plazo determinado de antemano en que se haya convenido.

Los detalles correspondientes tendrán que determinarse en el proceso de negociación con arreglo a esos principios.

b) El Gobierno y el ANC convienen en que durante el período provisional o de transición se mantendrá la continuidad constitucional y en que no habrá una laguna constitucional. Habida cuenta de este principio, convienen también en que:

- El órgano encargado de formular la constitución o la asamblea constituyente funcionará también como Parlamento provisional o de transición;
- Habrá un gobierno provisional o de transición de unidad nacional;
- El órgano encargado de formular la constitución o la asamblea constituyente, junto con el Parlamento provisional o de transición y el gobierno provisional o de transición de unidad nacional, funcionarán dentro de un marco constitucional o constitución de transición que establecerá un gobierno nacional y regional durante el período de transición y consagrará derechos y libertades fundamentales, con las garantías justiciables pertinentes. El Parlamento provisional o de transición podrá funcionar en régimen unicameral o bicameral;

c) Ambas partes están de acuerdo en que debe ponerse en libertad a todos los presos cuya reclusión guarde relación con el conflicto político del pasado y cuya excarcelación pueda ser propicia a la reconciliación. El Gobierno y el ANC convienen en que la liberación de los presos, esto es, de los presos que, de acuerdo con el ANC, estén encuadrados dentro de las directrices que definen los delitos políticos pero que, a juicio del Gobierno, no estén encuadrados dentro de esa definición y que hubieren cometido delitos de motivación política hasta el 8 de octubre de 1990 inclusive, se realizará por etapas (como se señala en un documento separado, titulado "Programa de ejecución: liberación de presos") y concluirá antes del 15 de noviembre de 1992. A ese fin, ambas partes han comenzado un proceso de identificación. El Gobierno declara que todos los que hubieren cometido delitos similares, pero no hubieren sido acusados y condenados, deben quedar encuadrados en el mismo régimen. Respecto de esta cuestión no se ha podido todavía llegar a un acuerdo, y se conviene en que la cuestión será objeto de ulterior deliberación.

A medida que avance el proceso de identificación, las excarcelaciones se efectuarán con arreglo a la modalidad por etapas antes mencionada. Si se comprueba que las actuales facultades del poder ejecutivo del Estado no le autorizan a dar efecto a ciertas liberaciones que se deriven de ese proceso de identificación, se procederá entonces a sancionar la legislación que sea necesaria.

d) La Comisión Goldstone, que ha continuado examinando los albergues, ha dado a conocer un informe de carácter urgente respecto de ciertas cuestiones y acontecimientos en la materia. La Comisión ha declarado que el problema es un problema de delincuencia y que tendrá que investigar cuáles son las localidades afectadas.

Entretanto, se han descubierto algunos albergues problemáticos y el Gobierno se ha comprometido a examinar y resolver, con carácter urgente, el problema de los albergues en los cuales se han cometido actos de violencia. También se adoptarán otras medidas, incluido el cierre perimetral de esos albergues y su vigilancia policial, por un lado, para impedir que sus residentes cometan actos delictivos y, por el otro, para proteger a los residentes contra agresiones externas. En un documento por separado (Programa de ejecución: albergues) se enumeran esos albergues y se indican las medidas de seguridad que se adoptarán en esos casos.

Se informará de los progresos en la materia a la Comisión Goldstone y a la Secretaría Nacional de Paz. Los observadores de las Naciones Unidas podrán vigilar los progresos en cooperación con la Comisión Goldstone y la Secretaría Nacional de Paz.

e) En la delicada atmósfera de violencia ahora reinante, la exhibición y el porte en público de armas peligrosas provoca nuevas tensiones y debe prohibirse. El Gobierno ha informado al ANC de que, dentro de pocas semanas, hará una proclamación, en virtud de la cual prohibirá en todo el país el porte y la exhibición de armas peligrosas en los actos públicos, salvo por las excepciones que correspondan con arreglo a las directrices que ahora prepara la Comisión Goldstone. La autorización de las excepciones se encomendará a uno o más jueces jubilados. Con arreglo a esta decisión, los términos de la proclamación y el procedimiento de excepción se prepararán con el concurso de la Comisión Goldstone.

f) El Gobierno reconoce el derecho de todas las partes y organizaciones a participar en manifestaciones masivas pacíficas de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Nacional de Paz y las recomendaciones de la Comisión Goldstone. El ANC, por su parte, reafirma su adhesión a las disposiciones del Código de Conducta de los Partidos Políticos, convenidas en el marco del Acuerdo Nacional de Paz, por un lado, y al acuerdo suscrito el 16 de julio de 1992 con el auspicio de la Comisión Goldstone, por el otro, que constituyen instrumentos importantes para garantizar una actividad política democrática en un clima de libre participación política. Ambas partes se comprometen también a fortalecer el proceso del Acuerdo Nacional de Paz, a hacer todo lo que esté a su alcance para calmar los ánimos y a encontrar medios y arbitrios de propiciar la reconciliación en Sudáfrica.



En vista de los progresos que se han hecho en la presente reunión en la cumbre y de los progresos que probablemente se harán cuando se reanuden las negociaciones, el ANC expresa su intención de consultar a sus representados, con carácter urgente, a fin de examinar el actual programa de movilización de masas.

3. Ambas partes convienen en celebrar nuevas reuniones para atender y resolver definitivamente los siguientes asuntos, que no fue posible resolver definitivamente en el curso de la presente reunión en la cumbre:

- a) El clima de libre participación política.
- b) La legislación represiva y de seguridad.
- c) Las operaciones secretas y las fuerzas especiales.
- d) Los actos de violencia.

Dado en Johannesburgo el 26 de septiembre de 1992.

F. W. de Klerk  
Presidente del Estado

N. R. MANDELA  
Presidente del ANC

-----